



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Demandante: JOSÉ ANCIZAR ORTEGA RENDÓN
Demandado: COLPENSIONES Y OTRO
Procedencia: JUZGADO DIECIOCHO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA n.º 118 del 04 de agosto de 2023.
Radicado n.º: 05001-31-05-018-2021-00053-01 (O2-23-129)

En Medellín, a los cuatro (04) días del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022 y en consonancia con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA20-11567 del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**, **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE** y **VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, quien actúa como magistrado sustanciador, procede a decidir el recurso de apelación propuesto por Porvenir S.A. y el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, dentro del proceso ordinario instaurado por **JOSÉ ANCIZAR ORTEGA RENDÓN** en contra de **COLPENSIONES** y **PORVENIR S.A.**, dentro del proceso con radicado n.º 05001-31-05-018-2021-00053-01 (O2-23-129).

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala, y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la siguiente sentencia que en derecho corresponda.

AUTO

De conformidad con el memorial allegado vía correo electrónico, se acepta la renuncia del poder allegado por Fabio Andrés Vallejo Chanci, identificado con C.C. No 71.379.806 y Tarjeta Profesional No 198.214 del CSJ, de conformidad con el artículo 76 y siguientes del CGP.

1. ANTECEDENTES

1.1 Demanda. Mediante vocera judicial, el litigioso por activo **JOSÉ ANCIZAR ORTEGA RENDÓN** pretende que se declare la ineficacia del traslado de régimen pensional, y en consecuencia, se ordene su afiliación al RPMPD, con el traslado de todos los valores por concepto de administración, así como el reconocimiento y pago de la pensión de vejez por

COLPENSIONES, la indexación de las mesadas, el pago de las costas y agencias en derecho. Como fundamento fáctico, señaló que nació el 25 de julio de 1960 y se trasladó al RAIS en mayo de 2001 a través de la AFP PORVENIR S.A.; que al momento del traslado de régimen la AFP omitió informarlo sobre las consecuencias adversas del cambio de régimen; que en enero de 2021 solicitó el traslado régimen pensional a COLPENSIONES, pedimento que fue resuelto negativamente el mismo día (Fols. 1 a 15 archivo No 01).

1.2 Trámite de primera instancia y contestación de la demanda. La demanda fue admitida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín mediante auto del 24 de febrero de 2021 (doc. 5 pág. 1 y 2), con el cual ordenó su notificación y traslado a las partes accionadas.

1.2.1 COLPENSIONES. Una vez notificada (doc. 8 pág. 3), contestó la demanda el 15 de marzo de 2021 a través de apoderada judicial (doc. 13 pág. 2 y ss.), oponiéndose a las pretensiones elevadas por carecer de fundamentación fáctica, legal y probatoria, al tiempo de postular las excepciones de mérito que denominó: carga dinámica de la prueba, inoponibilidad por ser tercero de buena fe, improcedencia para decretar la ineficacia del traslado de régimen, improcedencia de intereses moratorios, improcedencia de la indexación de las condenas, prescripción, devolución de cuotas y gastos de administración, buena fe, e improcedencia de condena en costas.

1.2.2 PORVENIR S.A.: Una vez notificada (doc. 7 pág. 1), dio respuesta a la demanda a través de apoderado judicial el 23 de marzo de 2021 (doc. 14 pág. 1 y ss.), quien se opuso a las pretensiones de la demanda, arguyendo al efecto que la vinculación fue libre, espontánea y sin presiones; que en el evento de declararse la ineficacia no es procedente la devolución de gastos de administración, ya que son conceptos descontados por disposición del artículo 20 de la Ley 100 de 1993. Propuso los medios enervantes de mérito que tituló: prescripción, buena fe, e inexistencia de la obligación, compensación y la genérica.

1.3 Decisión de primer grado. El proceso se dirimió en primera instancia mediante sentencia proferida 19 de mayo de 2023 (docs. 26 pág.1 y ss., con audiencia virtual) oportunidad en la cual la cognoscente de instancia declaró la ineficacia del traslado del demandante al RAIS, ordenando a PORVENIR S.A., trasladar a COLPENSIONES todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación, como cotizaciones, rendimientos, cuotas de administración indexadas, primas de reaseguros y primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, porcentajes destinados al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima, y detalle pormenorizado de los ciclos, IBC; y entre tanto, a COLPENSIONES, a tener como

afiliado al demandante, y recibir dichas sumas de dinero. Finalmente, gravó en costas a AFP PORVENIR S.A.

1.2 Apelación. La decisión fue recurrida por PORVENIR S.A., quien manifestó que resulta incompatible ordenar la devolución de las cuotas de administración, primas, porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima debidamente indexado, por cuanto el accionante no se ha visto afectado por la inflación y sus rendimientos en la AFP han sido muy superiores a los que se reconocen en el RPMPD. Finalmente, esgrime que ordenar que la AFP indexe cualquier suma, implica una doble sanción, supera con creces la pérdida del poder adquisitivo de los dineros del afiliado presentados en los aportes pensionales.

1.5 Trámite de Segunda Instancia. El recurso de apelación y el grado jurisdiccional de consulta fue admitido por esta corporación el 26 de junio de 2023 (carp. 02, doc. 02), y mediante auto del 04 de julio de 2023 (carp. 02, doc. 03), se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la ley 2213 de 2022, presentaran alegatos de conclusión por escrito, de estimarlo del caso, siendo que oportunamente Porvenir S.A. deprecia que se revoque la decisión de instancia y se absuelva de todas las pretensiones, dado que no se configura la ineficacia alegada.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

2.1 Apelación sentencia, y principio de consonancia. Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por Porvenir S.A., advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia dealzada, así como también se revisará en el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 ibídem, para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

2.2 Problema jurídico: El *thema decidendi* en la presente Litis se circunscribe en definir: **i)** ¿Si procede la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional del demandado al régimen de ahorro individual con solidaridad?, y en caso afirmativo, **ii)** ¿Cuáles son los efectos jurídicos que devienen de la ineficacia del traslado?

2.3 Tesis de la sala y solución a los problemas jurídicos planteados. El sentido del fallo de esta Corporación será **confirmatorio** en tanto es procedente la declaración de ineficacia de la afiliación y del traslado de régimen pensional a la AFP demandada, siguiendo la tesis de que no se brindó la asesoría integral y cualificada que pregonaba el precedente de la Sala

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y en cuanto a las consecuencias jurídicas que conlleva la devolución de las cotizaciones, esto es, que se debe contemplar también el traslado de las sumas descontadas para el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima, por seguros previsionales y por gastos o comisiones de administración, **adicionándolo** en cuanto a que todos los descuentos deben ser devueltos debidamente indexados, de conformidad con los argumentos que se expondrán a continuación.

2.4 Ineficacia del traslado del RPMPD al RAIS. En lo que interesa a la litis, no es objeto de discusión que el accionante nació el 25 de julio de 1960 (doc. 2 pág. 18), venía afiliado al régimen de prima media con prestación definida administrado por el otrora ISS, hoy COLPENSIONES, desde el 1 de febrero de 1991 (Archivo No 12, doc.GRP-SCH-HL-66554443332211_1942-20210310083710 pág. 1 y ss.); que no es beneficiario del régimen de transición por edad (doc. 2 pág. 18), ni por tiempo de servicios (Archivo No12 doc. GRP-SCH-HL-66554443332211_1942-20210310083710 pág. 1 a 13); que se afilió al RAIS a través de la AFP PORVENIR S.A., el **21 de mayo de 2001** (doc. 2 pág. 19); y que solicitó su traslado a COLPENSIONES el 15 de diciembre del 2015 (doc. 12 doc. GAF-FAF-AF-2015_12076856-20151215082637 pág. 1), mismo que le fue denegado mediante comunicado del mismo día (doc. 12 doc. GEN-RES-CO-2015_12076856-20151215085512 pág. 1).

Para resolver de fondo la Litis, sea lo primero señalar que este juzgador plural viene acogiendo el criterio jurisprudencial sostenido antaño por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia y desarrollado desde el año 2008 con la sentencia de radicación n.º 31989 del 9 de septiembre de 2008 hasta la más reciente sentencia SL2229-2022, línea jurisprudencial en la que se haya el precedente judicial por seguir, de donde se desprende que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones es un deber ineludible desde su creación; que la suscripción del formulario de afiliación es insuficiente para probar el cumplimiento de tal deber, requiriéndose la prueba del consentimiento informado; que la carga de la prueba le corresponde a las AFP, por virtud de su inversión a favor del afiliado como parte débil de la relación jurídica contractual, y que el alcance de la jurisprudencia laboral citada, permite aplicarla a todos los eventos de traslado de régimen pensional, sin importar que el derecho esté consolidado, sea beneficiario del régimen de transición, o esté próxima o no a pensionarse.

En esa misma dirección, preciso es ponderar por la Sala que para la fecha del traslado de régimen pensional el 21 de mayo de 2001, la AFP accionada tenía la obligación de brindar información detallada en cumplimiento de lo normado en los artículos 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, y 97 numeral 1º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003, lo que al decir de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL1688 de 2019, consiste en brindar: *“Ilustración de las características,*

condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales”.

Conforme los anteriores basamentos legales y jurisprudenciales, tenemos que, en lo concerniente a la afiliación y traslado de régimen pensional, se allegó por parte de la AFP el correspondiente formulario de afiliación (doc. 14 pág. 68); empero tal probanza no refleja que de manera documentada se haya presentado la asesoría cualificada exigida, y por contera, no es posible concluir que la AFP cumpliera con los mínimos de transparencia, claridad y completitud en la información que debía ser suministrada, en tanto no basta con referir las características de cada uno de los regímenes, sino también las consecuencias adversas del traslado de régimen, mismas que no fueron explicitadas previo, o cuando menos, al momento de efectuarse la afiliación y traslado del régimen pensional.

En este punto, estima pertinente la Sala anotar que si la AFP convidada al juicio no cuenta con soporte documental para la fecha del traslado que dé cuenta del cumplimiento de los mínimos de transparencia, claridad y completitud en la información que debía ser suministrada, por cuanto la información la brindó únicamente de manera verbal, siendo que tal circunstancia entra en contravención de lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 692 de 1994, pues no basta con allegar un formato pre-impreso de vinculación cumpliendo con los requisitos simplemente formales que señala la Superintendencia Financiera de Colombia, sino que se requiere la prueba de la efectiva asesoría integral brindada al momento del traslado, indicando las ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, con la advertencia de las condiciones requeridas para optar por la pensión de vejez anticipada antes de la edad mínima, la posibilidad de efectuar aportes voluntarios superiores a las deducciones de ley por cotizaciones, o que el capital necesario para financiar la pensión de vejez aumenta si el afiliado cuenta con potenciales beneficiarios por sobrevivencia, pues de lo que se trata no solo es persuadir al afiliado con llamativos rendimientos financieros, sino que éste pueda lograr en lo futuro la pensión que mejor se acompañe con sus expectativas personales, su número de cotizaciones y su ingreso base de cotización.

Ahora, si bien el litigioso por activa de la relación procesal acepta en el interrogatorio que al momento de su traslado sostuvo una reunión con asesoras de la AFP (min. 44:46), no puede pasar de soslayo la Sala que el deber de información únicamente se satisface con la evidencia de que la decisión de la afiliado haya sido libre e informada, lo que no se logra acreditar por la AFP accionada, pues por el contrario, el actor aclaró que la asesoría brindada previamente a la afiliación fue superficial y fragmentaria, en tanto las asesoras le

manifestaron que quienes iban a pasarse para esa AFP lo podían realizar ^(min:44:39) pero sin que le indicaran todas las características y ventajas comparativas de los regímenes pensionales, ni las modalidades y requisitos pensionales de dicho régimen, y lo que es más gravoso, sin explicarle cuáles eran las posibles desventajas de afiliarse al RAIS.

Es de resaltar que la AFP del régimen de ahorro individual con solidaridad a la que se afilió y trasladó la pretensora, no desplegó actividad probatoria alguna enderezada a demostrar que el ejecutivo de servicios que atendió al litigioso por activa cumpliera con su deber legal de suministrar información clara, completa y comprensible al potencial afiliado, quebrantándose así lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 720 de 1994, pues por el contrario, la falta de soporte documental o archivo de la historia laboral de que trata el artículo 38 del Decreto 692 de 1994 permite inferir que, el traslado de régimen pensional no se ciñó a los parámetros legales y jurisprudenciales, sin que resulten suficientes las manifestaciones ambiguas y generalizadas hechas por el extremo litigiosa activo en desarrollo del interrogatorio de parte, y menos aún, las referidas a la condición académica o nivel de instrucción del demandante frente a un tema de alta complejidad como lo es la liquidación y cálculo de una mesada pensional, como también las referidas a que el afiliado no haya realizado indagaciones por su cuenta de su situación pensional, en tanto el deber de brindar tal información privilegiada corresponde *ope legis* a la AFP.

En lo concerniente a las re-asesorías para el traslado entre AFP del mismo régimen, esta Sala ha sido del criterio de que las mismas no convalidan la actuación viciada de traslado, por manera que, aún bajo el supuesto de que la accionante hubiere sido informada el 21 de mayo de 2001 (doc. 14 pág. 68) sobre el posible monto de su mesada pensional por vejez en el RAIS; ello no podría, *per se*, tener la virtualidad de subsanar o convalidar las falencias de información al momento del traslado de régimen pensional. A este respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tuvo la oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos: *“la Sala considera que este servicio no tiene la aptitud de subsanar el incumplimiento de la obligación de información en que incurrió la AFP al momento del traslado, por dos razones: (...) porque la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad. Como se dijo, el afiliado requiere para tomar decisiones de la entrega de datos bajo las variables de tiempo e información, que le permitan ponderar costos, desventajas y beneficios hacia el futuro. Desde este punto de vista, un dato solo será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad. Por el contrario, si la asesoría no se otorga oportunamente y, por tanto, pierde su utilidad, ello equivale a la ausencia de información”* (SL1688 de 2019).

De igual forma, en el mismo precedente judicial en cita, la Corte Suprema de Justicia estudia la excepción de saneamiento de la nulidad relativa, precisando que el cambio de régimen pensional debe abordarse desde la institución de la ineficacia en sentido estricto y no desde el régimen de las nulidades sustanciales, salvo en lo relativo a las consecuencias prácticas, esto es, el restablecimiento del *status quo*, indicando que: *“la reacción del ordenamiento jurídico a la afiliación desinformada es la ineficacia, o la exclusión de todo efecto jurídico del acto de traslado. Por consiguiente, el examen del acto del cambio de régimen pensional, por transgresión del deber de información, debe abordarse desde la institución de la ineficacia en sentido estricto y no desde el régimen de las nulidades sustanciales, salvo en lo relativo a sus consecuencias prácticas (vuelta al status quo ante, art. 1746 CC)2. Lo anterior, debido a que en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, el legislador consagró de manera expresa en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 que la violación del derecho a la afiliación libre del trabajador es la ineficacia. En efecto, el citado precepto refiere que cuando «el empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral [...] la afiliación respectiva quedará sin efecto».” (S1467-2021).*

Así las cosas, habrá de confirmarse la decisión de instancia en este aspecto, en tanto con acierto declaró la ineficacia de la afiliación y el consiguiente retorno al RPMPD sin solución de continuidad.

2.5 Traslado de las cotizaciones. Sobre esta materia, cumple señalar que tal devolución debe ceñirse a los términos del artículo 1746 del Código Civil, en consonancia a lo pregonado por la jurisprudencia laboral del máximo tribunal de esta jurisdicción, como en las sentencias con radicados n.º 31898 de 2008, SL4989-2018 y SL1429-2019, y a su vez, que COLPENSIONES tiene el deber de recibir las cotizaciones, sin que el hecho de que este ente de seguridad social pueda tratarse de un tercero la imposibilite para recibir los aportes realizados, por la simple y llana razón de que es este el que administra el régimen de prima media con prestación definida, a donde se encontraba el demandante antes del traslado de régimen pensional.

En el anterior contexto, la Sala estima pertinente resaltar las prédicas de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como en la sentencia SL3202-2021, en la que se recapitulan las implicaciones y consecuencias de la declaratoria de ineficacia de la afiliación al RAIS, de la cual se trasuntan los apartes pertinentes:

“i) que ésta involucra la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual, en el sentido que debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida;

ii) que ello incluye el reintegro a Colpensiones, además de lo consignado en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos y los bonos pensionales, lo recaudado por gastos de administración y comisiones debidamente indexados durante todo el tiempo que el demandante permaneció en el RAIS, así como los valores utilizados en seguros previsionales y los emolumentos destinados a constituir el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima.

iii) que los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional, conlleva que todas las cotizaciones efectuadas por la promotora del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones.”

Así pues, la ineficacia del traslado conlleva precisamente a que el fondo privado devuelva todas las cotizaciones que hubiere recibido, incluyendo lo correspondiente al porcentaje que por gastos o comisión de administración haya descontado de las cotizaciones, así como también lo descontado para el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima (Decreto 3995 de 2008 artículo 7, Sentencia SU-062 de 2010), y las sumas de la aseguradora (primas previsionales), pues carecería de sentido y objeto la declaratoria de ineficacia por la falta de la información exigida, de no trasladarse de manera íntegra las cotizaciones efectuadas, viéndose favorecida la AFP sin razón financiera atendible, pues si bien tales descuentos, tuvieron un origen legal y sirvieron en su momento a un propósito jurídicamente establecido como el aseguramiento de los riesgos de invalidez y muerte, la administración de las cotizaciones o el fortalecimiento de un Fondo de Garantía de la Pensión Mínima, aquellos nunca hubieran sido efectuados por la AFP de no haberse verificado la afiliación y traslado de régimen pensional.

Conforme a lo dicho, esta Sala considera que hay lugar al traslado de todos los valores obrantes en la cuenta de ahorro individual del actor, a propósito de que engrosen el fondo común de naturaleza pública, según las previsiones contenidas en el artículo 32 de la Ley 100 de 1993, de modo que, se garantice no solo la sostenibilidad financiera del sistema, sino también la plena realización del principio de solidaridad de que trata el artículo 2 *ibídem*. Por demás, no hay lugar a reconocer restituciones mutuas, pues como se predica

en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia atrás referenciada, se deben devolver todos los rubros descontados de las cotizaciones, y si bien no pasa por alto esta Sala la existencia de un pronunciamiento de la Superintendencia Financiera en sentido contrario, es del caso precisar que el mismo se refiere a los traslados a instancia de la afiliado (a) y no merced a la declaratoria de ineficacia del traslado pensional, y que en últimas, tal acto no es de obligatorio acatamiento para los operadores judiciales, allende que, la Sala se aviene a línea jurisprudencial que en derredor del tema ha venido desarrollando la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como quedó dicho *in extenso* en líneas anteriores.

Así mismo, debe ordenarse que la devolución de los descuentos se haga de manera indexada, atendiendo a que si bien aquella no fue impetrada con la demanda, vale decir, no fue materia de debate en el presente proceso, debe procederse a su reconocimiento oficioso, en tanto que ello no se traduce en una condena sino que solo connota el reconocimiento del efecto de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda por el paso del tiempo de las sumas descontadas de las cotizaciones por los rubros atrás descritos, prohijándose el criterio jurisprudencial expuesto en la reciente sentencia SL950-2022 emitida por la H. Corte Suprema de justicia, Sala de Casación Laboral.

En suma, vale acotar por recapitular los predicamentos del máximo tribunal de casación laboral, en la reciente sentencia SL1126-2022, Radicación n.º90257, del 23 de marzo de 2022, M.P. Omar Ángel Mejía Amador, cuando describe de forma meridiana cuál es la carga asumida por los fondos privados, aun tratándose de traslados horizontales dentro del RAIS, que significa la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, en los siguientes términos: “...Por tal razón, esa declaratoria obliga a las entidades del RAIS a devolver todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual del titular, ya que los mismos serán utilizados para la financiación de la prestación pensional a que tenga derecho el afiliado en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones del saldo de la cuenta individual, sus rendimientos y los bonos pensionales, los valores cobrados por los fondos privados a título de gastos de administración y comisiones, incluidos los aportes para el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima y las primas de los seguros previsionales, sumas debidamente indexadas, pues, desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al RPMPD administrado por Colpensiones (CSJ SL2877-2020, SL 5595-2021). Y sin perjuicio de las acciones que pueda ejercer Colpensiones por los conceptos adeudados a favor del demandante generados en virtud de los múltiples traslados”. -Subrayas de la Sala-

De suerte que, es menester adicionar la decisión de primera instancia, en el sentido de ordenar que la devolución de los descuentos por seguros previsionales y por aportes al

Fondo de Garantía de la Pensión Mínima se efectúe de manera indexada, como se dispuso frente a las cuotas de administración.

2.6 Excepción de prescripción. En cuanto a la excepción de prescripción propuesta, se memoran los predicamentos del máximo tribunal de esta jurisdicción, según los cuales: *“a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria”* (SL1465-2021), a más de que la Sala ha sido del iterativo criterio que en esta clase de procesos, las consecuencias de la declaratoria de la ineficacia determinan que sea un imperativo el traslado de las aportaciones de manera íntegra, y al tratarse de un asunto íntimamente ligado con la materialización del derecho a la pensión de vejez, de naturaleza imprescriptible, unívoco tratamiento ha de reconocérsele, como así lo decantó la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia SL361, radicación 63615 del 13 de febrero de 2019.

2.7 Costas. Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. y en favor del actor, por haberse resuelto desfavorablemente el recurso de apelación propuesto, fijándose como agencias en derecho la suma de un (1) SMMLV, esto es, la suma de \$ 1.160.000. Sin costas en esta instancia contra de COLPENSIONES, pues la sentencia se analizó integralmente en favor de dicha entidad pública en virtud al grado jurisdiccional de consulta. Las de primera se confirman.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: ADICIONAR el numeral **SEGUNDO** de la sentencia materia de apelación y consulta proferida el 19 de mayo de 2023 por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín, la **ORDEN** a la AFP PORVENIR S.A. (durante el tiempo de afiliación en la AFP) para que los conceptos ordenados en el referido numeral (seguros previsionales y por aportes al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima), los traslade **debidamente indexados**, sin que haya lugar a deducir alguna comisión o realizar descuentos a las cotizaciones, de conformidad con la parte motiva de este fallo.

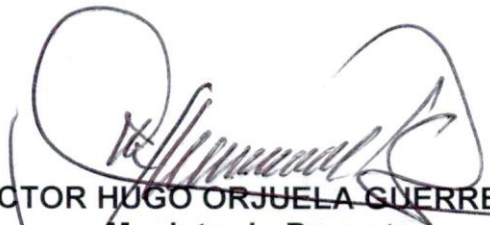
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia que se revisa por vía de apelación y consulta.

TERCERO: COSTAS en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. y en favor de JOSÉ ANCIZAR ORTEGA RENDÓN, fijándose como agencias en derecho la suma de \$ 1.160.000, equivalente a un (1) SMMLV. Las de primera instancia se confirman.

Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, acogándose el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen. Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

Cópiese, comuníquese y cúmplase



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



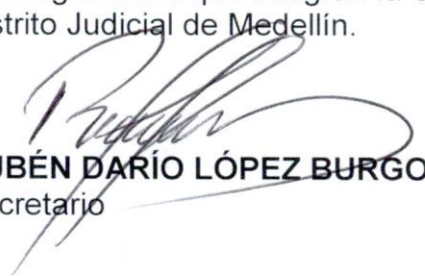
CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario